



FOTOGRAFÍA: LUIS QUINTEROS/ATON

Patricio Bernedo:

“Esta es una iniciativa para no tener a los pueblos originarios encapsulados en un museo”

Paulina Modiano

Hace casi un mes la Comisión para la Paz y el Entendimiento —convocada para formular proposiciones de solución al denominado conflicto mapuche— entregó sus propuestas al Presidente Gabriel Boric. El informe final incluyó 21 propuestas basadas en cinco ejes: justicia y reconocimiento; reparación a las víctimas de la violencia; otorgamiento de tierras; desarrollo territorial y garantías de ejecución de estas medidas.

Si bien el acuerdo ha sido valorado en varios sectores, también ha concitado algunas críticas —especialmente de la oposición y de algunos gremios empresaria-

El historiador y director del Centro UC para el Diálogo y la Paz, valora las proposiciones emanadas por la Comisión para el Entendimiento en la Araucanía. Pero advierte: “Si el Estado falla nuevamente con esta propuesta va ser peor”.

les— en particular por la cantidad y disponibilidad de las tierras que se podrían entregar a las comunidades mapuche. Otros muestran escepticismo ante la escasa viabilidad política de estas medidas en un año electoral.

Patricio Bernedo, profesor titular del Instituto de Historia de la Universidad Católica y director del Centro UC para el Diálogo y la Paz (que hace unos días organizó un seminario para analizar las conclusiones de la comisión), es de los que piensan que no hay que hacerse ilusiones. Cualquier solución razonable y duradera sólo verá la luz en el transcurso de varios gobiernos.

Por lo pronto, este doctor en Historia reconoce la complejidad de la restitución

de tierras: “El problema específicamente con las tierras es que son pocas las que están en manos del Estado y las otras que están disponibles tendrían que negociarse con privados. Y eso es lo que en alguna medida genera violencia, porque hay algunas comunidades que presionan a los dueños para que les vendan, lo que se vuelve una situación extrema”.

De todas formas, agrega que “esta es la primera vez que se arma un paquete concreto de propuestas que apuntan a lo económico, a lo político y obviamente al tema de las tierras”.

“No se puede normalizar el Estado de Excepción”

—¿Cómo evalúa la propuesta de la



Comisión para la Paz y el Entendimiento?

—Esta es la propuesta más seria que se ha planteado para abordar los problemas de la Araucanía. De partida, tuvo una conformación totalmente transversal, incorporando a casi todo el espectro político, y a quienes han estado implicados en los conflictos que afectan a la zona. Ello dio espacio a un trabajo bastante profundo, que permitió abordar los tres temas más relevantes: el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, dentro de los cuales el más importante es el mapuche; la restitución de tierras, bajo distintas modalidades; y un aspecto más bien cultural, que implica que la sociedad en su conjunto asuma a las etnias como parte de nuestra diversidad.

—¿Por qué cree que el reconocimiento constitucional es tan relevante?

—Si uno mira las seis comisiones presidenciales que se crearon anteriormente para tratar de resolver este tema, porque la actual es ya la séptima, siempre ha estado presente el tema del reconocimiento constitucional. Para mí ese es el punto de partida, porque es una buena oportunidad de integrar a los mapuches y a los demás pueblos originarios a la sociedad, asumiendo que somos diversos, que no tenemos una nacionalidad única y que existen distintas etnias que tienen una forma de ser, un idioma, y una manera de relacionarse que es propia de su tradición y de su cultura.

—**Pero el reconocimiento de la diversidad, no sólo a nivel político, sino dentro de la misma sociedad chilena, ha sido tradicionalmente un tema bien controvertido. Más allá de las reivindicaciones, sólo un porcentaje muy pequeño de la población acepta abiertamente tener ascendencia mapuche o de algún otro pueblo originario.**

—Efectivamente. Esa mirada es la que, entre otras cosas, ha impedido solucionar de manera práctica el conflicto en la Araucanía. Hay efectivamente un elemento de racismo presente. Ahora, si tú vas al sur, probablemente hay una predisposición mayor a esta integración de la diversidad y a los temas de interculturalidad. Y es ahí donde entra el trabajo de los políticos, que son los responsables de que esto salga adelante. También hay un aporte importante que pueden hacer la sociedad civil, las universidades o centros de pensamiento, pero siempre con una mirada de que esto no se soluciona de un día para otro, de que es un proceso largo en que se debe trabajar arduamente para ir revirtiendo esos esquemas tan fuertemente arraigados. Por eso estoy convencido de que esta es una buena iniciativa para incorporar a los pueblos originarios al resto del país, y no tenerlos encapsulados en una especie de vitrina de museo, completamente desligados de la vida política, económica y social del país, y de todo proceso de modernización.

—**¿Estas propuestas son viables**

realmente? Porque estamos viviendo un momento de gran polarización política y hay sectores, principalmente de derecha, que rechazarán las propuestas de la comisión sin siquiera conocerlas.

—El tema que las fuerzas políticas tienen que considerar, más allá de sus primeras reacciones, es que estamos hablando de personas, chilenos o mapuche, que viven en una zona que está en una crisis económica desde hace años. Es, sin duda, la zona más pobre del país, la más postergada y donde la gente vive con mucho miedo. Y eso se debe básicamente a que el Estado no ejerce soberanía plena.

—**El hecho de que el Estado no ejerza soberanía plena es bien evidente. El Gobierno, a pesar de su negativa inicial, ha mantenido el Estado de Excepción en la Macrozona Sur durante tres años. Además se sospecha que muchos hechos de violencia en el área están vinculados al crimen organizado.**

—Exactamente, y esa es una situación que no se puede perpetuar. No se puede normalizar tener una zona bajo Estado de Excepción porque no hay otra forma de controlarla. El Estado chileno tiene que hacerse cargo del tema de la violencia terrorista, de la violencia narco y del crimen organizado. Hay gente que le critica a la comisión no haberse referido a ello específicamente, pero no era parte de su trabajo. Y a eso se suma que el Estado chileno todavía es mirado con desconfianza o con reticencia por parte del pueblo mapuche. Y si el Estado falla nuevamente con esta propuesta va ser peor. En definitiva, quienes deben asumir ese acercamiento, esa generación de confianza y el establecimiento de puentes con el pueblo mapuche, son los políticos.

“Lo que no puede pasar es que nadie se haga cargo”

—**¿Pero ve usted un interés real de los políticos por impulsar con decisión el desarrollo de esta propuesta? La campaña presidencial ya está lanzada y no hay un solo candidato, a izquierda y derecha, que haya planteado este tema como una prioridad.**

—Pero es un tema que se puede instalar también. Sería importante que existieran liderazgos potentes que crean en esta propuesta. Pueden ser del mismo sur, para que este tema tenga realmente una discusión que se aborde seriamente y se ponga un horizonte de materialización. Lo que no puede pasar es que nadie se haga cargo. Lo que hace falta es tomar esto como una política de Estado que se ejecute independientemente de los gobiernos de turno, porque, como ya dije, la solución no es de corto plazo.

—**Al margen del reconocimiento constitucional y social a los pueblos originarios, la recuperación de tierras es y ha sido una demanda permanente por parte de los mapuche. Pero hay quienes plantean dudas de que se pueda llevar a cabo, porque el Estado no tiene un volumen importante de suelos disponibles**



El tema que las fuerzas políticas tienen que considerar, más allá de sus primeras reacciones, es que estamos hablando de personas, chilenos o mapuches que viven en una zona que está en crisis desde hace años”.



Es posible resolver este problema apelando a la racionalidad, a la urgencia y a la necesidad de lograr un avance pacífico dentro de un régimen democrático. Si esto no resulta, se podría abrir un espacio para la violencia”.

en la zona.

—Ese es uno de los aspectos que fue bien trabajado en esta propuesta, porque sin eliminar del todo la entrega de tierras, abre distintas alternativas para obtener compensaciones a través de otros mecanismos como, por ejemplo, aportes monetarios que permitan a una familia saldar pagos de dividendos que le permitan terminar de adquirir sus viviendas. Hay varias opciones con esa orientación y también se eliminan muchas limitaciones a las que estaban sometidas las personas que recibían directamente terrenos. Si bien se mantiene la restricción de venta de las tierras, se elimina la obligación de que sean administradas sólo comunitariamente y no en forma individual, el impedimento de que puedan ser arrendadas o entregadas en medianía, o la prohibición de sean administradas de una forma capitalista, porque eso simplemente las deja fuera del mercado. Hay distintas combinaciones que permiten que se genere una renta y el usufructo lo reciben individual o colectivamente los mapuche, sin perder la propiedad.

—**¿Cree que alcanzará con el fondo de 4.000 millones de dólares destinado para la compra de terrenos?**

—Mucha gente dice que el fondo que se propone para materializar la propuesta es muy elevado. Pero tampoco es una cantidad exorbitante. Hay muchos gastos equivalentes en el Estado que pueden ser absolutamente superfluos y que podrían ser reorientados.

—**Parte importante de esas tierras tendrían que ser vendidas por quienes son sus actuales propietarios, principalmente productores agrícolas, que no necesariamente estarían dispuestos a hacerlo. Eso podría explicar que el único voto disidente en la comisión, que impidió la aprobación unánime de sus proposiciones, fuera el del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán.**

—Me parece que lo que influyó en esa decisión y que impidió que hubiera unanimidad fue más bien un asunto de carácter político. Porque si uno analiza las prevenciones que planteó esa persona, son aspectos que se pueden negociar. Entonces, yo creo que todavía es posible que este problema pueda resolverse, apelando a la racionalidad, a la urgencia del tema y a la necesidad de lograr un avance pacífico dentro de un régimen democrático. Si esto no resulta, lamentablemente se podría abrir un espacio para la violencia.

—**¿Cree que en el lapso que le resta al actual Gobierno se pueda al menos iniciar el camino propuesto por la comisión.**

—Yo creo que un paso que se puede dar es dejar armada la consulta indígena. Pero claramente el resto de las iniciativas van a tener que ser desarrolladas por el próximo Gobierno. Lo importante es que este tema avance y no quede empantanado nuevamente por falta de voluntad política.